

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA // E-FACTURA

(WEB MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA)

NORMATIVA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Según la Disposición Adicional Segunda de la LEY 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, se establece que hasta que se produzca el despliegue reglamentario al que se refiere el párrafo tercero del artículo 4 de la ley de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, **quedarán excluidas de la obligación de facturación electrónica las facturas de proveedores de bienes y servicios de la Generalitat el importe de las cuales no supere los 3.000 euros.**

NORMATIVA ESTATAL

Según promueve la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, el uso de la factura electrónica será el generalizado para los proveedores en su trato con las administraciones públicas, y para ello utilizarán la plataforma FACE.

El Artículo 4 de la ley 25/2013 de 27 de diciembre establece que todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración Pública podrán expedir y remitir factura electrónica. En todo caso, estarán obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada que corresponda, las entidades siguientes:

- a) Sociedades anónimas;
- b) Sociedades de responsabilidad limitada;
- c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española;
- d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la normativa tributaria;
- e) Uniones temporales de empresas;
- f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros y a las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las Administraciones Públicas hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.